

Perú

Entre el proceso electoral y las incertidumbres del futuro

Carlos Franco

El presente artículo describe y analiza las condiciones político-institucionales y económico-sociales que contribuyeron a moldear el reciente proceso electoral en el Perú. Posteriormente, y luego de dar cuenta de la atmósfera en que se desarrollaron la primera y segunda vuelta, así como las estrategias políticas puestas en obra por los principales candidatos a la presidencia del país, Alejandro Toledo y Alan García, se ensaya una explicación de los, para muchos, «sorprendentes» resultados electorales. Finalmente, el autor define el conflicto entre la magnitud de las demandas sociales y la escasez de los recursos disponibles para su satisfacción como el rasgo sustantivo de la actual situación del Perú, y explora en las posibilidades abiertas, y las resistencias opuestas, a la concertación política de sus principales actores.

Escrito dos semanas después de conocidos los resultados de las elecciones presidenciales, el título del presente artículo refleja algo más que el obligado ejercicio de prudencia, impuesto por la extrema vulnerabilidad del país, a sus analistas y observadores políticos. En efecto, parece igualmente dar cuenta de una suerte de «estado de ánimo» que se extiende en la población y que aparentemente combina, de modo contradictorio, una cautelosa expectativa en torno del gobierno recientemente elegido y una marcada impaciencia por el más pronto cumplimiento de sus promesas electorales.

En todo caso, para hacer verosímiles las insinuaciones precedentes, intentaremos en lo que sigue describir las condiciones que moldearon el proceso electoral, para luego esbozar el nuevo cuadro político generado por sus –para muchos– «sorprendentes» resultados. Ello nos permitirá, más adelante, advertir la tensión existente entre la magnitud de las demandas sociales y la

CARLOS FRANCO: profesor de la Maestría y Doctorado de Sociología en la Universidad de San Marcos; investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - Cedep, Lima; miembro del Comité Editor de *Socialismo y Participación*, Cedep; es consultor de diversas agencias del sistema de Naciones Unidas; su último libro: *Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina*, Fundación Ebert, Lima, 1998.

Palabras clave: elecciones, situación política, sistema político, Perú.

escasez de recursos disponibles por el nuevo gobierno para su satisfacción, así como las circunstancias que parecen resistir, al menos hasta ahora, la realización de las propuestas de «concertación política» que centran hoy el debate nacional.

Del proceso electoral: la primera vuelta

Cuando se revisan los análisis del proceso electoral publicados a lo largo del presente año, muy pronto se constata el acuerdo de sus autores en que el interés de la mayoría de la población por las elecciones solo se hace evidente en las semanas previas a la primera vuelta y que, al menos en parte, a ello contribuye el retorno de Alan García al país y el inicio de su campaña electoral. Curiosamente, sin embargo, la eventual conexión de estos dos hechos no retuvo la atención de los analistas sino hasta el momento en que las encuestas sobre las intenciones de voto revelaron la probabilidad del pasaje de García a la segunda y definitiva vuelta electoral.

Hasta ese momento, el menor interés relativo prestado a las elecciones fue atribuido a una multiplicidad de factores cuya mayor visibilidad e impacto político, según los analistas, concentraba la atención de los electores. No hay duda, en tal sentido, que el ominoso espectáculo mediático de la corrupción pública presentado diariamente en los denominados «vladivideos», la continua revelación de los lazos que comprometían, en verdaderas asociaciones para delinquir, a Vladimiro Montesinos con casi todos los miembros de la cúpula castrense, dueños de bancos y grandes empresas, propietarios y directores de importantes medios de comunicación, conocidos políticos y parlamentarios, etc., o, en fin, las frecuentes denuncias realizadas por las comisiones investigadoras del Congreso, las unidades de investigación del periodismo independiente y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, contribuyeron decisivamente a la formación de una atmósfera política que desplazó a un segundo plano el interés por la competencia electoral, al menos en el curso de los primeros meses del año.

Aunque en menor medida, una función similar fue cumplida por el conjunto de acciones desarrolladas por el gobierno de transición, presidido por Valentín Paniagua, en favor de la reconstrucción democrática de las instituciones públicas, el escrupuloso respeto de la ley, el castigo y separación de sus cargos de funcionarios del Estado comprometidos en actos de corrupción y la promoción de un proceso electoral libre, equitativo y transparente. En la medida en que estas acciones implicaron cambios sustantivos en las FFAA, el Servicio Nacional de Inteligencia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Poder Electoral, etc., la separación, detención y sometimiento a juicio de las principales autoridades civiles y militares del fujimorismo y la derogatoria de leyes anticonstitucionales que ampararon la corrupción, los crímenes y la violación de derechos humanos cometidos por la dictadura, fue inevitable que ellas retuvieran la atención ciudadana en el mismo periodo. Lo propio puede señalarse a pro-

pósito ahora de los «descubrimientos» sobre el apoyo de la CIA a Montesinos, del respaldo brindado por el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad norteamericanos a la permanencia de Fujimori en el poder luego de conocidos los resultados de las elecciones de 2000 y de la protección que hoy recibe del gobierno japonés.

Si bien estos factores contribuyeron a configurar la atmósfera política, mediática e institucional en que se desenvuelve el proceso electoral hasta avanzada la primera vuelta, no son suficientes para explicar el menor interés relativo que le prestó la población. Y no lo son pues no toman en cuenta los concurrentes efectos producidos en la percepción de dicho proceso por el nuevo deterioro experimentado por las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos en los primeros meses del año. El impacto de ese deterioro será mejor entendido si se recuerda que, a fines de 2000, el país llevaba más de tres años sumido en una profunda recesión; los niveles de empleo e ingresos se encontraban por debajo de aquellos que caracterizaron los dramáticos años finales de los 80; el porcentaje de la población en condición de pobreza había experimentado un nuevo aumento de modo que la Encuesta Nacional de Niveles de Vida la cifraba ahora en 54,6%, esto es, casi 10% más que la media latinoamericana; y, en fin, que 45% de las familias del país recibían donaciones alimentarias del Gobierno para sobrevivir, porcentaje que ascendía a 75% en el caso de las familias rurales. Formaba parte de este sombrío cuadro la ruptura de la cadena de pagos de la deuda que el Perú arrastraba desde el segundo semestre de 1998.

En efecto, operando en el marco de una prolongada y profunda recesión que impedía el empleo de más de 50% de la capacidad instalada de las empresas, la mayoría de éstas se encontraba en crisis o «quiebra técnica» e imposibilitadas de honrar sus deudas con la banca comercial y pagar sus impuestos al Estado. Concurrentemente, mientras la perversa combinación de política de ajuste, incremento del déficit fiscal y pago escrupuloso de los intereses de la deuda externa limitaban la capacidad del gobierno de Fujimori para enfrentar el desplome de la economía, la banca privada tampoco se encontraba en condiciones de sanear sus cuentas o aumentar sus depósitos, a pesar del apoyo gubernamental, la reducción de la competencia dada la quiebra de algunas entidades o la política de fusión de activos.

Es precisamente en el cuadro de esta situación límite que el gobierno de transición opta por una política económica que, en lo esencial, reproduce los lineamientos de la administración anterior. Entendiendo que su misión era el saneamiento de las cuentas fiscales, el cumplimiento de la carta de intención firmada con el FMI y el pago de los intereses de la deuda externa, el ministro de Economía —Javier Silva Ruete— produce un nuevo ajuste fiscal orientado a cumplir las metas acordadas con el FMI, comprometiéndose a reducir el déficit de 3,3 a 1,5 del PBI. A la vez, rechaza las propuestas de renegociación de la deuda externa, cuyo pago anual asciende a casi 2.000 millones de dólares y decide, para ese propósito, contraer nueva deuda. Finalmente, expresa su voluntad de continuar la privatización de empresas públicas, cuya plena

ejecución debe postergar tanto por las resistencias que encuentra en los sindicatos y el Parlamento, como por la renuencia de los inversionistas extranjeros.

La aplicación de esta política no solo profundiza aún más la recesión, hace descender el producto en 3,5% en el primer cuatrimestre del año e incrementa el desempleo, sino que impide al Gobierno y los agentes económicos reconectar la cadena de pagos. Por esta razón, nuevamente se incrementa el número de empresas que se declaran insolventes y vuelven a fracasar, tal como ocurría en el gobierno de Fujimori, los mecanismos de la nueva administración para reestructurar o reprogramar el pago de las deudas con el fisco y el sistema financiero. Nada de ello, sin embargo, evidencia de modo más notorio el contexto económico-social en que se desarrolla el proceso electoral que las interminables filas de ciudadanos agolpados en las puertas de las empresas en búsqueda de empleo o las impresionantes multitudes que en estos meses, y desde las madrugadas, asedian los locales públicos y las embajadas extranjeras en procura de pasaportes o visas para abandonar el país.

Si nos hemos detenido en la rápida descripción de la situación económico-social del país, frecuentemente desatendida en los análisis políticos del proceso electoral, no es solo para insinuar que, bajo los rigores de la sobrevivencia que envuelve a la mayoría de los peruanos, resultaba «costosa» la atención o el interés que se le podía dispensar, al menos, avanzada la primera vuelta. En realidad, si lo hicimos fue porque su recuerdo ayuda a entender la «racionalidad» social que parece explicar tanto el comportamiento electoral de esas mayorías, el pasaje de Alejandro Toledo y Alan García a la segunda vuelta y los, para muchos, sorprendentes resultados finales de las elecciones.

Lo cierto –y curioso– del asunto es que la escasa atención prestada inicialmente al proceso electoral es atribuible tanto a los rigores de la sobrevivencia como al hecho de que los dos candidatos mejor situados en ese momento –Alejandro Toledo, por Perú Posible, y Lourdes Flores, por Unidad Nacional (UN)– mostraban su acuerdo, puntuales discrepancias al margen, con la retórica neoliberal del programa económico del gobierno de Fujimori y, en esa medida, no habían incorporado en su agenda política los problemas experimentados por la mayoría de la población cuya representación disputaban. Ello resultaba doblemente «curioso» porque las encuestas de opinión desde 1993 en adelante habían revelado que, para la vasta mayoría de los peruanos, los «problemas más importantes del país» eran el empleo y los ingresos, opinión que se acompañaba tanto del rechazo a la política económica, a la privatización de empresas públicas, a la priorización del pago de la deuda externa, a las abusivas tarifas de los servicios básicos, a las altas tasas de interés, a la pobreza y desigualdad existentes, etc., así como reflejaban una aguda conciencia de que los «ganadores» del modelo económico eran los inversionistas extranjeros, las empresas transnacionales y los dueños de los bancos.

No es casual entonces que la reaparición de Alan García –que sus competidores calificaran como «perturbadora»– y su tardío ingreso al proceso electoral

estimularan gradualmente el interés por las elecciones. Su lento pero persistente crecimiento en las encuestas –atribuido por algunos a sus capacidades oratorias, la novedad de su presencia luego de casi una década de exilio, el desconocimiento por los jóvenes de los resultados de su gobierno, y por otros a la «amnesia», el «caudillismo», las «taras» o al «primitivismo mágico y premoderno» de la cultura popular– puede ser entendido de otra manera. En efecto, la eficacia electoral del discurso de García derivó principalmente de una elaboración de sus contenidos por cuyo intermedio una parte creciente del electorado popular comenzó a experimentarse reconocido, en sus necesidades, problemas y demandas y luego de casi una década, en la esfera pública y el debate político. No se trata tan solo de que a los fines de posicionarse diferencialmente en la contienda electoral, García levantara la crítica al modelo neoliberal o a la «dictadura económica del fujimorismo». Tan importante como ello, al menos para sus propios objetivos, es la particular traducción que realizara de las temáticas del empleo e ingreso popular –cuyo abordaje, por otra parte y dadas las condiciones del país, era inevitable para cualquier candidato–, al hacer referencia a los concretos problemas experimentados por la mayoría de los peruanos: la brutal extensión de la jornada de trabajo y los salarios de hambre, la explotación del trabajo juvenil por los «services» contratados por las empresas, los ínicuos montos de las pensiones de los jubilados, la imposibilidad para muchos peruanos de pagar las tarifas por servicios o las deudas contraídas con la banca de consumo, la inexistencia práctica de créditos y precios rentables para los campesinos, etc. El éxito inicial de este discurso se expresó en el cambio que produjo en la agenda del debate presidencial y en su pronta incorporación a las campañas de los candidatos principales, muy especialmente Toledo.

El discurso de García se acompañó igualmente de un ejercicio autocrítico de la política económica ejecutada por su gobierno y de un genérico programa de reactivación productiva y empleo que, según sus promesas y a diferencia del pasado, se aplicaría con estricta observancia de los equilibrios macroeconómicos. Concurrentemente, argumentando la extrema vulnerabilidad del país y los signos recesivos del mercado internacional, planteó la necesidad de una política de concertación nacional, abierta a todas las fuerzas económicas, políticas y sociales, señalando que en caso de ser elegido convocaría a políticos y técnicos, independientes u opositores, al ejercicio del Gobierno, y entregaría a la oposición el control de decisivas instituciones públicas como, entre otras, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de la Banca y Seguros y la Defensoría del Pueblo.

Si este discurso comenzó gradualmente a superar la criba de la incredulidad y la sospecha con que fuera inicialmente recibido por un sector importante de la población fue, al menos en parte, por la autocontención y mesura con que fuera expuesto, el trato cordial y respetuoso que dispensara a sus competidores y por la curiosa impresión que generara de no estar particularmente «obsesionado» por ganar la presidencia. Pero tanto como ello concurrió en su favor el comportamiento de los candidatos mejor situados en las

encuestas. En efecto, a pesar de concordar en las críticas a García, Toledo y Flores se enfrascaron en un penoso intercambio de agravios personales que, al tiempo de detener su ascenso en las encuestas concluyó, por oposición, favoreciendo la campaña del «tercero».

Resulta evidente que el más perjudicado por ello fue Toledo, pues la revelación del apoyo brindado a Flores por la banca, los grupos empresariales, la tecnocracia neoliberal y las agencias internacionales evaluadoras de riesgos impuso pronto un techo a sus aspiraciones presidenciales. Este no era precisamente el caso de Toledo, cuyo arraigo popular en el interior del país –muy especialmente en el centro y sur andino como en los migrantes que pueblan las ciudades–, el generalizado reconocimiento de su papel en las movilizaciones que provocaron la caída de la dictadura y su propia biografía personal, auguraban altas probabilidades de realización a su evidente deseo de obtener la presidencia en la primera vuelta. Si ello no ocurrió, según la mayoría de los analistas, no fue tanto por las críticas que sus opositores y ciertos medios de comunicación dirigieron a algunos aspectos de su vida privada, al erratismo de su conducta o a los secretos del financiamiento de su campaña sino, más bien, a su renuencia a enfrentarlas directa y públicamente.

En todo caso, cuando en las semanas previas a la primera vuelta las encuestas revelaron el estacionamiento de las preferencias por Toledo, la declinación de Flores y el lento pero constante ascenso de las intenciones de voto por García, pero, sobre todo que los electores indecisos o a favor del voto nulo o en blanco ascendían a 25% del padrón electoral, en este momento los analistas políticos más experimentados intuyeron, como efectivamente ocurrió, que Alan García pasaría a la segunda vuelta.

Del proceso electoral: la segunda vuelta

Por cierto, los resultados de la primera vuelta trazaron la línea de base de la segunda. Ellos arrojaron, en favor de Toledo, una ventaja de casi 11% sobre García (36,6% vs. 25,8%). A partir de ese momento ambos debían disputar el poco más de 37% de los votos recibidos por las restantes seis candidaturas, de los cuales 34% se distribuyeron entre Flores (24,2%) y Fernando Olivera (9,8%), candidato del Frente Independiente Moralizador (FIM).

Las reacciones a esos resultados, considerados «sorprendentes», no se hicieron esperar. Los representantes de los bancos de inversión, las agencias evaluadoras de riesgos, los operadores de bolsa, la tecnocracia neoliberal, los gremios empresariales vinculados en la Confederación Nacional de Empresarios y diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros hicieron conocer de inmediato los «peligros» que para la estabilidad del país entrañaba la posibilidad del retorno de García al poder, así como sus temores de una «involución populista» de Toledo. Esas declaraciones, seguidas de inmediato por la caída de la bolsa, el incremento del riesgo país y los anuncios de suspensión de nuevas inversiones extranjeras –calificadas todas como «el efecto García»–,

expresaron la postura de los mercados ante la nueva situación, que volvió a reiterarse en distintos momentos de la campaña electoral y, en especial, en la semana previa a la realización de la segunda vuelta.

Se dio inicio entonces a una violenta campaña política contra García y Toledo, originada en esos mismos medios, el entorno cercano a UN y en lo que las encuestas denominan los sectores «a» y «b» de la sociedad peruana, orientada a demostrar que cualquiera fuera el elegido el país se encontraba al borde de un «nuevo y definitivo fracaso histórico». Dicha campaña, que negaba a ambos candidatos «calidades morales y políticas» para gobernar el Perú, y no ahorra ocasión alguna para recordar «el pasado de García» o envolver, en la retórica política contra Toledo, el silencioso racismo de las clases altas, concluía llamando a los electores a votar en blanco y/o anular su voto, especulando con la idea de alcanzar con ello los dos tercios que harían posible la convocatoria a nuevas elecciones.

Las estrategias empleadas por ambos candidatos para enfrentar la segunda vuelta, y las nuevas condiciones políticas que la enmarcaban, siguieron diferentes guiones. La de Toledo combinó inicialmente la crítica contra el antiguo gobierno de García, la búsqueda del respaldo político del ex-presidente Belaúnde y del partido que dirige, Acción Popular, y el establecimiento de alianzas con Olivera y el FIM, Flores y UN y, en general, con la totalidad de candidatos y movimientos que se presentaron en la primera vuelta. No le fue difícil, en este sentido, obtener el apoyo de Belaúnde, entre otras razones porque su compañero de fórmula en la vicepresidencia, Raúl Diez Canseco, antiguo dirigente de AP, había contado con la autorización de su partido para ser candidato vicepresidencial. El apoyo que le prestara Olivera y el FIM fue, más bien, inmediato: Olivera, según consenso cuasi-unánime, había organizado y desarrollado su vida política en torno de denuncias sistemáticas contra García y su gobierno.

Estos apoyos no eran en modo alguno desdeñables, pues mientras en la primera vuelta la representación parlamentaria de AP había obtenido 4,4% de los votos, la candidatura presidencial de Olivera recabó cerca de 10% de las preferencias electorales. La sumatoria de ambos porcentajes a aquel recibido por Toledo casi aseguraba su triunfo, impresión tanto más verosímil por la fundada expectativa de que un contingente más o menos importante de los votantes de Flores y otros candidatos lo favorecerían en las urnas. Lo cierto sin embargo es que advertido por las encuestas de la ambigua recepción a su campaña contra García y del potencial peligro que, tras el «voto escondido», se encubriera una disposición electoral favorable a éste, Toledo decide transferir a Olivera el ataque a su rival, al tiempo que reinicia una vigorosa campaña en la que el recorrido por todo el país se acompaña de múltiples ofertas orientadas a satisfacer las también múltiples demandas de la población.

La estrategia de García, en cambio, partió de otro tipo de consideraciones. Aparentemente convencido, por una parte, de la inutilidad de cualquier es-

fuerzo por encontrar aliados en las fuerzas políticas que participaron en la primera vuelta y, por otra, de que la debilidad de éstas y sus líderes les impedía definir la posición de sus electores en la segunda vuelta, decidió perseverar en los contenidos principales de su discurso y estilo político, ampliándolo sin embargo de modo de incorporar los planteos y demandas de los sectores que habían votado contra él. A ello contribuyó, sin duda, su propia certidumbre de que la mayoría de sus votantes no eran militantes de su partido sino independientes. Esto le permitió renovar su convocatoria a la concertación nacional por la vía de una retórica moderada y persuasiva que, en la medida de lo posible, reconocía los méritos de su adversario y evitaba responder los ataques de que era objeto.

Para ello empleó a plenitud las oportunidades que le abrían los medios de comunicación acentuando su autocritica por los errores cometidos durante su gobierno, alentando la esperanza de los jóvenes, solicitando un debate con Toledo y, aparente o realmente, reconociendo la legitimidad de las razones por las cuales un sector del electorado parecía haber optado por el voto en blanco o la anulación de su voto. Esta postura se reveló políticamente eficaz cuando Toledo por fin acepta debatir. En efecto, si bien por el grado de articulación de las intervenciones o por las ofertas programáticas resultaba difícil advertir las diferencias entre ellos, la apelación simultánea de García a «los sentimientos y razones de la gente», a la «solidaridad entre los peruanos» y la aparente o real «madurez» con que reaccionó a los ataques de su adversario le permitieron, según todas las encuestas, obtener holgadamente la aprobación mayoritaria.

Probablemente por ello, cuando semanas antes de la segunda vuelta las encuestas le daban a Toledo una ventaja variable entre 10% y 20%, pero cifraban en 9% los electores indecisos y en un tercio el porcentaje de aquellos que declaraban su propósito de votar blanco o nulo, de nuevo los analistas más experimentados comenzaron a intuir la probabilidad de un resultado estrecho. Probablemente por ello también se redobló en las últimas semanas la campaña de los medios y los «mercados» contra la eventual «amenaza» de un triunfo de García. Finalmente Toledo obtiene la presidencia con 53% de los votos válidos contra 47% de García.

De la situación, los problemas y las incertidumbres

Según acuerdo virtualmente unánime, el rasgo principal de la situación del Perú es, como señaláramos, la tensión entre la magnitud de las demandas sociales y la escasez de los recursos disponibles para satisfacerlas. Las primeras se expresan hoy en la eclosión de reclamos por empleo, derechos e ingresos, la reactivación de protestas, movilizaciones y paros que comienzan a extenderse en el país, las exigencias de cumplimiento, mejor si inmediato, de las múltiples promesas electorales y, en fin, en la sensación de impaciencia que se percibe en las calles. Por esa razón, en caso de gozar de un cheque en blanco, los dirigentes del toledismo saben que se les extiende a plazo corto

y fijo. La escasez de recursos públicos, por otra parte, encuentra en estos días nuevas confirmaciones.

A pesar del ajuste fiscal y la consiguiente reducción del gasto social y de la inversión productiva del Estado, las estimaciones del déficit para fines de 2001 se cifran en 2,2% del producto. A su vez, y también a pesar de los esfuerzos realizados, la presión tributaria probablemente no supere 14% del PBI. Los pronósticos sobre el producto, también para fin de año, varían entre el crecimiento cero y 1%. Los ensayos de «ingeniería presupuestal», por su parte, parecen indicar que los recortes al gasto militar o a los «gastos innecesarios» en otros ministerios no modificarán sensiblemente la inflexibilidad a la baja del presupuesto, dedicado casi exclusivamente al gasto corriente y al pago de la deuda externa, mientras nuevos «descubrimientos» incrementan vertiginosamente los montos de la deuda interna.

En estas condiciones, el país deberá pagar por deuda externa una media anual de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Aparentemente decidido a no renegociar dicho compromiso con los organismos multilaterales, el voceado ministro de Economía de la próxima administración –Pedro Pablo Kuczynski–, elegido como señal hacia los mercados internacionales de un «sano manejo de la economía peruana», ha deslizado la idea de recurrir a la fórmula del argentino Domingo Cavallo, ofertando bonos públicos cuyos recursos puedan emplearse en el pago de la deuda y, «eventualmente», en la reducción del déficit fiscal. Ciertamente con razón, y para enfrentar esta situación, la nueva administración ha declarado su compromiso con la promoción de exportaciones, mejor si con valor agregado. Pero la recesión de los mercados internacionales, la declinación de los precios de las materias primas y los efectos de la crisis argentina parecen imponer un límite a las expectativas del nuevo gobierno, al menos en el corto plazo.

Dado el cuadro descrito, no es casual que la concertación política aparezca en los análisis como un medio imprescindible para manejar el conflicto demandas-recursos, encontrar fórmulas idóneas para reconectar la cadena de pagos, abrir gradualmente el proceso de reactivación de la economía, iniciar la reforma del Estado y proseguir la reforma de las instituciones públicas. La derrota del fujimorismo; la progresiva cercanía que se fue estableciendo en los programas de Toledo y García; la similitud de los intereses populares expresados a través de sus candidaturas; la renuncia al menos temporal de García a encabezar la oposición y su oferta de apoyo al gobierno de Toledo; la voluntad de colaboración con la nueva administración expresada por diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria y el hecho mismo de que ninguna bancada en el Congreso disponga de mayoría absoluta; son hechos que favorecen sin duda el empeño concertador.

A juzgar por lo que se observa, si tal empeño no se cristaliza hasta hoy es por las diferencias y tensiones que parecen desarrollarse al interior de Perú Posible y el entorno de Toledo. Dichas diferencias se vinculan, por un lado, con

el manejo de la economía y, por otro, con la definición de las relaciones y alianzas políticas. En relación con la primera y a pesar del cuidado de las apariencias, parece evidente para muchos observadores que la frágil coexistencia en el equipo económico toledista de una corriente comprometida con una sofisticada versión de los programas de reactivación por demanda —encabezada por prestigiosos economistas de la Universidad Católica— y la orientación neoliberal del jefe de dicho equipo y eventual ministro de Economía —el citado Kucsynski—, corre el riesgo de romperse. La próxima visita a Washington de una comisión encabezada por el presidente electo y su eventual ministro, probablemente arroje los primeros signos de la dirección en que se incline la balanza.

En lo referente a las diferencias en materia de relaciones y alianzas políticas, las informaciones disponibles indican que, mientras una corriente se inclina a rechazar cualquier vínculo con el APRA y García, privilegiando el establecimiento de una alianza, más bien conservadora, con Flores y fuerzas políticas menores, otra por lo que entiende como «realismo» se muestra dispuesta, sin mengua de la preservación de su independencia, a explorar con el APRA y otras fuerzas políticas las posibilidades de asegurar la gobernabilidad del país.

Mientras todo ello ocurre, nuevos signos de impaciencia y malestar social se acumulan en estos días a los ya conocidos. No resulta extraño entonces que las percepciones del futuro del país se acompañen del uso recurrente a expresiones tales como «inseguridad» o «incertidumbre».

Lima, junio de 2001



Chasqui

Revista Latinoamericana de Comunicación

Marzo 2001

Quito

Nº 83

PORTADA: Desinformación en la campaña electoral americana, **Miguel Sarmiento**. OPINION: Cambios en la comunicación política, **Ralph Murphine**. ENSAYOS: ESTADO DE LOS MEDIOS: La comunicación en América Latina: informe del Brasil, **Carlos Alberto Di Franco**. OPINION PUBLICA: ¿Cómo Chávez mantiene su popularidad?, **Xiomira Villasmil**. PRENSA: Lenguaje escrito y lenguaje visual, **Miguel Urabayen**. El periodismo «on line»: ¿amenaza de muerte al periodismo tradicional?, **Hanelore Döbler**. CINE: ¿Cómo hacer un guión cinematográfico?, **Ramón Salgueiro Pérez**. COMUNICACION INSTITUCIONAL: ¿Cómo solucionar los problemas de un banco?, **Iris Morera**. LENGUAJE: Errores comunes en el lenguaje periodístico, el «que» neurótico, **Simón Espinosa**. INFORMATICA: Microsoft Word: ¿cómo hacer mejor una macro? PERISCOPIO TECNOLOGICO. BIBLIOGRAFIA SOBRE COMUNICACION. ACTIVIDADES DE CIESPAL.

Chasqui, *Revista Latinoamericana de Comunicación - CIESPAL*; apartado 17-01-584, Quito, Ecuador. Telf.: (593-2) 506149; Fax: (593-2) 502487; e-mail: chasqui@ciespal.org.ec. Internet: <http://www.comunica.org/chasqui>